

**Consejo de Seguridad**

Distr. general  
22 de mayo de 2002  
Español  
Original: inglés

---

**Carta de fecha 22 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente del Pakistán antes las Naciones Unidas**

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitirle adjunta una carta, de fecha 22 de mayo de 2002, que le dirige el Sr. Abdul Sattar, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica del Pakistán, y en la que se señala a su amable atención la situación existente en el Asia meridional, que empeora por momentos y que representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales (véase el anexo).

Le agradecería que hiciese distribuir el texto de la presente carta como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Munir **Akram**  
Embajador  
Representante Permanente



**Anexo de la carta de fecha 22 de mayo de 2002 dirigida  
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante  
Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas**

**Carta de fecha 22 de mayo de 2002 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores  
del Pakistán ante las Naciones Unidas**

Las Naciones Unidas son fuente inagotable de esperanza para la humanidad por lo que se refiere a la prevención de la guerra y la promoción del arreglo pacífico de controversias internacionales de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. El Gobierno del Pakistán, teniendo esto presente, desea señalar a su atención el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que dispone que debe recurrirse a medios pacíficos para la resolución de controversias y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, mediante la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso a organismos o a acuerdos regionales u otros medios pacíficos.

Durante los últimos cinco meses, se han ido atizando tensiones peligrosas en Asia meridional. La India ha adelantado y desplegado casi un millón de soldados en posiciones de combate a lo largo de la frontera internacional con el Pakistán, la línea de demarcación provisional y la línea de control en Cachemira.

A pesar de los cientos de miles de soldados que ha posicionado y a los sofisticados dispositivos que ha desplegado a lo largo de la línea de control, la India acusa al Pakistán de infiltrarse a través de dicha línea. La India, que realiza acusaciones no corroboradas, se niega a que sus afirmaciones sean verificadas por el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP) o sometidas a una vigilancia e investigación imparciales. Tampoco permite que los medios de comunicación internacionales y las organizaciones internacionales de derechos humanos accedan a la Cachemira ocupada, para que puedan verificar independientemente la situación real existente en el territorio. La India declara también que tendrá constancia de cuándo la supuesta infiltración dejara de darse, con lo que se adjudica a sí misma las funciones de fiscal y juez.

Los dirigentes de la India acusan automáticamente al Pakistán de cada incidente violento que se produce en el interior de la India y en la Cachemira ocupada. Algunos dirigentes del Partido Bharatiya Janata han venido acusando al Pakistán incluso de la matanza de Gujarat, a pesar de que tanto la oposición política india como los grupos locales e internacionales de derechos humanos han responsabilizado directamente a fanáticos hindúes pertenecientes a organizaciones extremistas como Rashtriya Swayamsevak Sangh —que es el órgano del que depende el Partido Bharatiya Janata, actualmente en el poder—, Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal y Shiv Sena. El gobierno del estado de Gujarat, que está controlado por el Partido Bharatiya Janata, en realidad prestó asistencia a los pogromos de musulmanes y los instigó. Human Rights Watch, en su informe sobre la matanza de Gujarat, llegó a la conclusión de que “los ataques contra musulmanes en todo el estado fueron planificados, muy anteriormente al incidente de Godhra, y organizados contando con amplia participación policial y en estrecha participación con funcionarios del gobierno del estado, perteneciente al Partido Bharatiya Janata”. De forma similar, un informe realizado por un grupo de trabajo de mujeres patrocinado por Citizen’s Initiative,

observa que “el Estado (...) abdicó de su responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos; lo que es mucho peor, dio su consentimiento activo para que se mutilase, violase y masacrara a cientos de mujeres y niños de Gujarat”.

Esta misma actitud ha sido la adoptada por el Gobierno de la India en relación con los incidentes violentos acaecidos en el interior de la Cachemira ocupada. Tanto en el caso del incidente de Chitisingpura, ocurrido en marzo de 2000, como en los asesinatos de Amarnath Yatra, cometidos después, durante ese año, las autoridades indias alegaron que el Pakistán estaba involucrado. Estas falsas acusaciones son una injuria para la lucha de Cachemira por su libertad y también parte de una estrategia propagandística que tiene por objeto perpetuar la ocupación india de ese estado. De conformidad con All Parties Hurriyat Conference, más de 75.000 naturales de Cachemira han sido asesinados por fuerzas militares, paramilitares y policiales indias.

La India no sólo rechazó las investigaciones internacionales imparciales de estos y otros casos similares, sino que también abandonó sus propias investigaciones cuando empezó a ser evidente que dichos asesinatos podían en realidad haber sido perpetrados por fuerzas indias. El caso de la manipulación de las pruebas de ADN de los cachemires inocentes que fueron muertos al ser considerados terroristas responsables de la masacre de Chitisingpura es demasiado conocido para que debamos insistir en él.

El último ataque contra un campamento militar en Jammu, llevado a cabo el 14 de mayo de 2002, ha crispado el tono —ya estridente— de las amenazas indias. El Ministro de Defensa de la India ha hablado de “castigar” al Pakistán. El Jefe del Estado Mayor del Ejército Indio ha afirmado públicamente que “el tiempo de las palabras ha terminado. Es hora de actuar”. En una resolución aprobada el 17 de mayo por ambas cámaras del Parlamento de la India, se acusaba al Pakistán de fomentar el terrorismo. El 18 de mayo, el Gobierno de la India pidió la retirada de nuestro Alto Comisionado en Nueva Delhi. El motivo aducido por la India para hacer estas declaraciones amenazadoras y beligerantes y mantener la escalada peligrosa y la concentración de tropas es obvio. La India se ha embarcado en una diplomacia de coacción dirigida a presionar al Pakistán para que abandone su posición de principio sobre Cachemira. El Gobierno del Partido Bharatiya Janata también desea desviar la atención internacional de la matanza que está siendo perpetrada contra la comunidad musulmana minoritaria de Gujarat, así como sobre otras deficiencias internas.

Las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben preguntarse cómo puede ser que la India se esté preparando para entrar en guerra con el Pakistán, con todas las peligrosas consecuencias que ello conlleva, al tiempo que rechaza medios universalmente reconocidos para el arreglo de controversias, así como propuestas imparciales de investigación, supervisión y esclarecimiento de hechos o asistencia para rebajar la tensión. Ésta no puede ser la actitud de un Estado responsable, que respeta los principios de la Carta y cree en la paz y en las normas de conducta internacional. Es la conducta de un poder arrogante, que está decidido a explotar el clima y las cuestiones que preocupan actualmente a nivel internacional en su propio beneficio y que cree que cuenta con licencia para llevar a cabo una agresión so pretexto de luchar contra el terrorismo.

El Pakistán, que es parte de la coalición internacional contra el terrorismo, se está esforzando de forma comprometida y seria por combatir el terrorismo internacional y erradicar de nuestra sociedad el extremismo. Nuestros esfuerzos se ven obstaculizados por la escalada y la tensión resultantes de la enorme acumulación de

tropas indias a lo largo de nuestras fronteras. Ahora bien, aunque deseamos evitar el conflicto, también estamos dispuestos a hacer frente con resolución, en el ejercicio de nuestro derecho inherente a la legítima defensa, a cualquier agresión que provenga de la India y se dirija contra el territorio del Pakistán o los territorios de Cachemira cuya defensa sigue bajo nuestra responsabilidad. Deseamos evitar que los acontecimientos tomen ese curso, pero bajar la guardia o rebajar la alerta es algo que no nos podemos permitir.

Estamos dispuestos a cooperar en cualquier iniciativa o misión de buenos oficios llevada a cabo por las Naciones Unidas o la comunidad internacional a fin de reducir la tensión, mantener la paz y promover el diálogo entre los dos países.

Señalo a la atención de Vuestra Excelencia la situación imperante entre el Pakistán y la India en la esperanza de que Vuestra Excelencia dispondrá las medidas que considere apropiadas. La explosiva situación creada por la India al concentrar tropas en nuestra frontera y en la línea de control, así como las declaraciones injustificadas y amenazadoras de los dirigentes indios, representan una amenaza grave para la paz y la seguridad en la región. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que, desplegando sus buenos oficios ante la India, aconsejen a este país elegir la senda del diálogo y la negociación —antes que la confrontación— para resolver la cuestión de Jammu y Cachemira y otras cuestiones pendientes entre los dos países.

Le agradecería que hiciese distribuir la presente carta como documento de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

(*Firmado*) Abdul **Sattar**  
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica del Pakistán

---